



## TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, octubre 02 de 2020

### AUTO INTERLOCUTORIO No. 088

**Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME**

<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	<b>REPARACIÓN DIRECTA</b>
<b>DEMANDANTE</b>	<b>MILCIADES EDUARDO ROJAS MORENO</b> Correo: <a href="mailto:pedroemilioms@yahoo.com">pedroemilioms@yahoo.com</a>
<b>DEMANDADO:</b>	<b>PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN</b>
<b>RADICACIÓN:</b>	<b>76001-33-33-004-2019-00038-01</b>
<b>ASUNTO:</b>	<b>APELACIÓN AUTO – CONFIRMA RECHAZO POR CADUCIDAD</b>

#### 1. ASUNTO

Procede el Tribunal, en segunda instancia y a través de la Sala Tercera de Decisión Oral conformada por los doctores **FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ, JHON ERICK CHAVES BRAVO** y **RONALD OTTO CEDEÑO BLUME** a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante contra el auto interlocutorio No. 578 del 9 de julio de 2019, por medio del cual el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cali rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

#### 2. EL AUTO IMPUGNADO

Mediante auto interlocutorio No. 578 del 9 de julio de 2019<sup>1</sup>, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cali dispuso rechazar la demanda instaurada por el señor **MILCIADES EDUARDO ROJAS MORENO** en contra de la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.

Como sustento de su decisión, adujo en primer lugar que el medio de control de reparación directa escogido por la parte accionante no es el adecuado, siendo el correcto el de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto por cuanto la causa del daño reclamado por la parte demandante tiene su fundamento en los actos administrativos que modificaron su situación jurídica de carácter particular y concreto, es decir, los que llevaron a su desvinculación del cargo de Procurador 309 Judicial I de asuntos penales de Cali.

Dicho lo anterior, procedió adecuar la demanda al medio de control procedente y, seguidamente, concluyó que en el *sub examine* operó el fenómeno jurídico de la caducidad, comoquiera que el demandante tuvo conocimiento del acto que ordenó su desvinculación desde el 30 de agosto

---

<sup>1</sup> Folios 69-71.

de 2016 y la demanda fue radicada extemporáneamente el 26 de octubre de 2018.

### 3. LA IMPUGNACIÓN

El apoderado de la parte demandante manifestó su desacuerdo con la decisión de rechazar la demanda<sup>2</sup>, arguyendo que lo que pretende a través del medio de control incoado es el resarcimiento de los perjuicios causados, bajo el título de imputación del daño especial, a raíz del despido del señor **MILCIADES EDUARDO ROJAS MORENO**, con ocasión del nombramiento en propiedad y posesión de la señora MARÍA INÉS MURIEL PUERTO en el cargo que este ocupaba. Adujo que, si bien dicho nombramiento fue legal, causó un daño al demandante que debe ser reparado, lo cual torna procedente la escogencia del medio de control de reparación directa.

### 4. CONSIDERACIONES

#### 4.1. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

##### 4.1.1. LA FUENTE DEL DAÑO Y LA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL:

El Honorable Consejo de Estado ha sido enfático en señalar que la escogencia del medio de control no puede quedar al arbitrio del demandante y que su elección depende de los fines, móviles y motivos que lleven a su ejercicio. Por lo tanto, cuando el daño por el que se reclama se ha originado en un acto administrativo, el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho<sup>3</sup>.

No obstante, de manera excepcional, el medio de control de reparación directa resulta adecuado para reclamar el resarcimiento de los daños causados por un acto administrativo cuya legalidad no se discute. Al respecto, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha señalado lo siguiente:

*“La jurisprudencia nacional <sup>(22)</sup> ha indicado que si el perjuicio tuvo origen en una actividad lícita de la administración como es la que se desprende de la ejecución de un acto administrativo cuya legalidad no se discute, es posible reclamarlo mediante el ejercicio de la acción de reparación directa en la medida en que se configura un daño especial. De modo que no es forzoso reclamar, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la indemnización proveniente de actos administrativos expedidos con arreglo a la Constitución y la ley y cuya legalidad no se controvierte, sobre la base de que al imponerse al administrado una carga especial que no tiene por qué padecer se presenta un rompimiento del equilibrio en las cargas públicas, idea inserta en la conciencia jurídica moderna como una expresión del principio general de igualdad ante la ley <sup>(23)</sup>.  
(...)”*

---

<sup>2</sup> Folios 72-77.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Providencia del 3 de junio de 2011, Radicado No. 760012331000200900337 01 (40.424), Consejero Ponente: Dr. **MAURICIO FAJARDO GÓMEZ**.

ACCIÓN:  
RADICACIÓN:  
ACTOR:  
ACCIONADA:

REPARACIÓN DIRECTA  
76001-33-33-004-2019-00038-01  
MILCIADES EDUARDO ROJAS MORENO  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

*De modo que aun la actividad estatal legítima “tanto por la existencia y extensión del derecho que ejercita como por la fidelidad al procedimiento determinado legalmente” <sup>(27)</sup> —esto es, en ejercicio de sus competencias y obrando dentro del marco de las disposiciones legales— puede ocasionar al administrado un daño anormal, superior al que deben sufrir otros que se encuentran en idénticas condiciones, que, por lo mismo, excede el sacrificio que el común de los ciudadanos debe soportar, entraña el rompimiento de la “equidad que debe reinar ante los sacrificios que importa para los administrados la existencia del Estado” <sup>(28)</sup> y compromete así la responsabilidad patrimonial de la administración pública”<sup>4</sup>.*

#### **4.1.2. LA CADUCIDAD DE LOS MEDIOS DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y REPARACIÓN DIRECTA.**

El artículo 164, numeral 2, literales d) e i) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establecen, respectivamente, lo siguiente:

*“d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.”*

*(...)*

*i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.*

El artículo 169 *ibídem*, determina los casos en los cuales procederá el rechazo de la demanda, así:

**“Artículo 169.- Rechazo de la demanda.** Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad (...).”

Por otra parte, el artículo 180 de la norma en comento, en sus numerales 5 y 6, establece lo siguiente:

**“5. Saneamiento.** El juez deberá decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias.

---

<sup>4</sup> Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, sentencia del 11 de junio de 2014, Consejero Ponente HERNÁN ANDRADE RINCÓN, radicación número 250002326000-1999-02733—01 (25.738).

ACCIÓN:  
RADICACIÓN:  
ACTOR:  
ACCIONADA:

REPARACIÓN DIRECTA  
76001-33-33-004-2019-00038-01  
MILCIADES EDUARDO ROJAS MORENO  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

**6. Decisión de excepciones previas.** *El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, revolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva(...)"*

A partir de las prescripciones normativas mencionadas, se tiene que la caducidad, como presupuesto procesal de la acción, debe examinarse por el juez al momento de decidir sobre la admisión de la demanda o en la audiencia inicial, ya sea en la etapa de saneamiento o al momento de resolver las excepciones previas; y de advertirse que la demanda fue presentada fuera del término legal, debe sobrevenir el rechazo de plano de la demanda o la terminación del proceso, pues sería contrario al principio de economía procesal que se tramitara y fallara una acción que fue presentada extemporáneamente.

#### **4.2. EL CASO CONCRETO**

En el presente caso, el Juez de primera instancia, en la parte motiva del auto objeto de impugnación<sup>5</sup>, adujo que el daño cuyo resarcimiento pretende el demandante tiene su origen en los actos administrativos a través de los cuales se dispuso su desvinculación del cargo de Procurador 309 Judicial I en asuntos penales de Cali que venía desempeñando y, en consecuencia, el medio de control adecuado para reclamar los perjuicios causados es el de nulidad y restablecimiento del derecho, frente al cual operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

Para el Despacho, el análisis efectuado por el *a quo* no se ajusta a los parámetros jurisprudenciales mencionados en líneas anteriores, comoquiera que, conforme lo manifestado en el escrito de la demanda<sup>6</sup>, se puede evidenciar que lo que pretende el demandante es el resarcimiento de los perjuicios causados a este a raíz de su desvinculación, la cual fue producto del nombramiento en propiedad de la señora MARÍA INÉS MURIEL PRIETO en el cargo de Procuradora 309 Judicial I Penal de Cali.

En efecto, en el acápite de hechos<sup>7</sup> se narra que, a partir del 30 de agosto de 2016, en virtud de un concurso de méritos, la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** designó en el cargo que el demandante venía desempeñando a la señora MARÍA INÉS MURIEL PUERTO, por hacer parte de la lista de elegibles. También se menciona que, por medio de sentencia de tutela, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali<sup>8</sup>, con el fin de proteger el derecho a la estabilidad reforzada, ordenó el reintegro del accionante en un cargo de iguales condiciones al que venía desempeñando y que, en virtud de dicha orden, el 2 de agosto de 2017, éste se posesionó en el cargo de Procurador 266 Judicial I en asuntos penales de San José del Guaviare.

Conforme a lo relatado, el apoderado de la parte actora solicita<sup>9</sup> el resarcimiento de los perjuicios causados a raíz de la decisión legítima del Estado de nombrar a la señora MARÍA INÉS MURIEL PUERTO que, a su vez, dio

---

<sup>5</sup> Folios 69-71.

<sup>6</sup> Folios 55-62.

<sup>7</sup> Folios 57-59 y reverso.

<sup>8</sup> Folios 21-32.

<sup>9</sup> Folios 55-57.

ACCIÓN:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN:	76001-33-33-004-2019-00038-01
ACTOR:	MILCIADES EDUARDO ROJAS MORENO
ACCIONADA:	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

lugar a la desvinculación de su poderdante desde el 30 de agosto de 2016 hasta el 2 de agosto de 2017, quien se encontraba en un estado de debilidad manifiesta debido a su delicado estado de salud.

Así las cosas, son de recibo los argumentos expuestos en el recurso de apelación, consistentes en que el medio de control idóneo para reclamar la indemnización por los daños generados a raíz del nombramiento en propiedad de la señora MARÍA INÉS MURIEL PUERTO en el cargo que venía desempeñando el accionante es el de reparación directa, comoquiera que estos se originaron por la expedición de un acto administrativo cuya legalidad no se cuestiona.

Dicho lo anterior, en el presente caso, el término de caducidad del medio de control de reparación directa – 2 años- debe contabilizarse a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho generador del daño, esto es, el 30 de agosto de 2016, fecha en la que, según lo manifestado por el mismo accionante, se posesionó la señora MARÍA INÉS MURIEL PUERTO en el cargo que éste venía desempeñando.

La solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 2 de agosto de 2018, es decir, faltando 30 días para el vencimiento del término de caducidad y la constancia que dio por agotado el aludido requisito de procedibilidad se expidió el 12 de septiembre de 2018<sup>10</sup>; luego, el término de caducidad se reanudó el 13 de septiembre de 2018, fecha a partir de la cual empezaron a correr los 30 días faltantes para la configuración de la caducidad.

Conforme a lo anterior, el lapso para presentar oportunamente la demanda se extendió hasta el 12 de octubre de 2018; no obstante, la demanda fue radicada extemporáneamente, el 26 de octubre del 2018<sup>11</sup>.

Merced de lo anterior, habrá de confirmarse la decisión tomada por el Juez de primera instancia, consistente en rechazar la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia, referentes a que si bien el medio de control de reparación directa es el idóneo para reclamar el resarcimiento de los perjuicios presuntamente causados a la parte demandante, la demanda fue interpuesta por fuera del término legal.

Por lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

## RESUELVE

**PRIMERO: CONFIRMAR** la decisión tomada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cali, mediante auto interlocutorio No. 578 del 9 de julio de 2019, por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad frente al medio de control de reparación directa impetrado por la parte demandante.

---

<sup>10</sup> Folios 51-53.

<sup>11</sup> Folio 63.

Respecto a la forma de contabilizar el término de caducidad, ver auto del Consejo de Estado del 22 de marzo de 2013, Consejera Ponente MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, radicación número 52001-23-31-000-2012-00228-01.

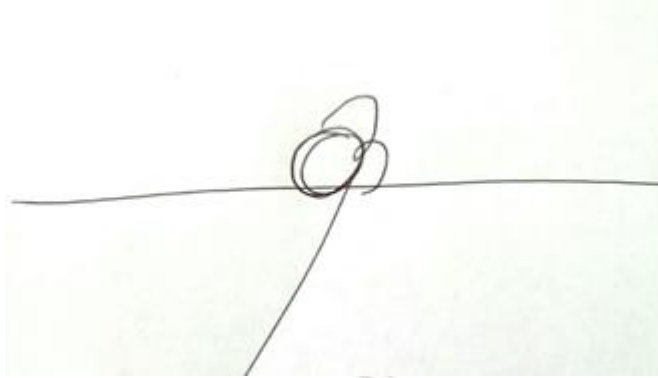
ACCIÓN:  
RADICACIÓN:  
ACTOR:  
ACCIONADA:

REPARACIÓN DIRECTA  
76001-33-33-004-2019-00038-01  
MILCIADES EDUARDO ROJAS MORENO  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

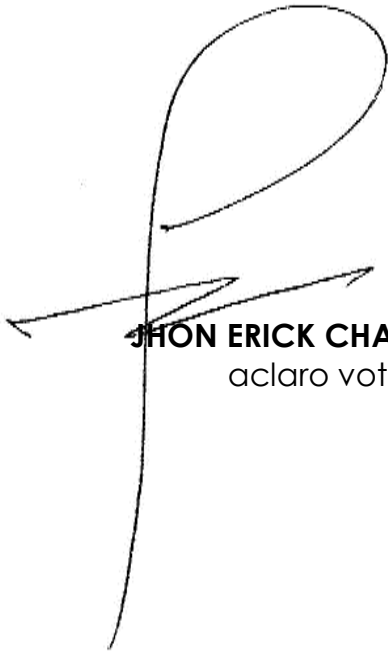
**SEGUNDO:** En firme la presente providencia, remítase el expediente al juzgado de origen, para lo de su cargo.

**Notifíquese y cúmplase,**

Los Magistrados,

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a small loop above it and a diagonal line extending downwards to the right.

**RONALD OTTO CEDEÑO BLUME**

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the top and a long vertical stroke extending downwards.

**JHON ERICK CHAVES BRAVO**  
aclaro voto

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop at the top and a long vertical stroke extending downwards.

**FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ**

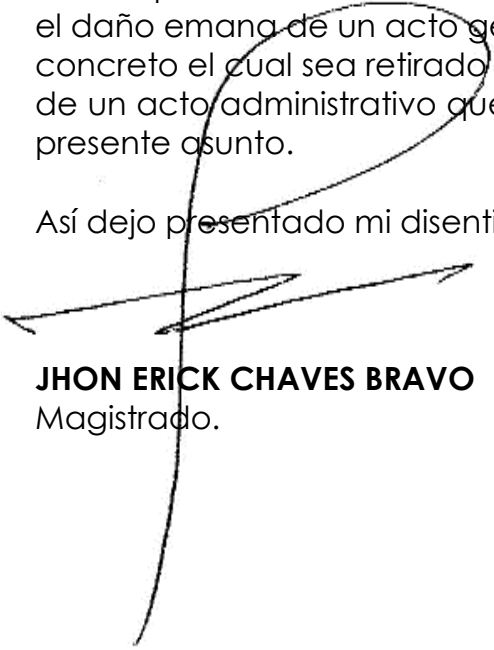
ACCIÓN:  
RADICACIÓN:  
ACTOR:  
ACCIONADA:

REPARACIÓN DIRECTA  
76001-33-33-004-2019-00038-01  
MILCIADES EDUARDO ROJAS MORENO  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

### **ACLARACION DE VOTO.**

Si bien estoy de acuerdo con la decisión final, no comparto las razones ya que debió confirmarse por las razones expuestas por el Juez de primera instancia, ya que en ultimas el daño nace del acto administrativo por cuanto presuntamente desvinculó al demandante teniendo una incapacidad, es decir el daño surge del acto administrativo. Por otra parte, la reparación directa procede cuando el daño emana de actos en dos ocasiones cuando el daño emana de un acto general en el que no medie un acto particular y concreto el cual sea retirado del ordenamiento jurídico y por la revocatoria de un acto administrativo que concedió un derecho, casos que no son del presente asunto.

Así dejo presentado mi disentimiento.



**JHON ERICK CHAVES BRAVO**  
Magistrado.